JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D. C. veintidós de febrero de dos mil veintitrés

REF: TUTELA RAD.: 110013103027 2023-00067-00 Accionante: RODRIGO PEÑA BAUTISTA contra JUZGADO 71 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ se vincula a MARIA LIBIA CALVO VASQUEZ Asunto: Fallo

Superado el trámite que le es propio a esta instancia, se resuelve lo pertinente a la Acción de Tutela formulada por la señora: RODRIGO PEÑA BAUTISTA.

ANTECEDENTES.

A través del escrito que fuera introductorio de la presente acción, se pretende se tutele en su favor el derecho constitucional fundamental al debido proceso y acceso de la administración de justicia, por considerar que el mismo ha sido vulnerado y amenazado por el Juzgado aquí accionado, en atención a los siguientes hechos:

1. El señor Rodrigo Peña Bautista radico proceso Ejecutivo contra María Libia Calvo Vásquez y otro, repartido al Juzgado 71 Civil Municipal de Bogotá.
2. Se libró mandamiento de pago y decretó el embargo de la garantía hipotecaria, posteriormente se corrigió el auto de apremio, y luego se aportó la constancia de notificación de la demandada.
3. Presentaron incidente de nulidad y excepciones, resuelto los recursos interpuestos se señaló fecha para audiencia del art. 372 del C.G.P.
4. El 14 de enero de 2019, 5 meses después de proferido el auto se registró en la página de la rama judicial, recurso de reposición formulado por el demandado, el que fue resuelto.
5. Se señaló nueva fecha para la audiencia, la que tampoco se realizó indicándose que se tomaría una medida de saneamiento, ya que carecía de competencia, declarando el despacho con auto del 30 de agosto de 2019, nulidad de lo actuado, remitiendo el expediente al Juzgado 72 Civil Municipal.
6. El Juzgado 72 devuelve el expediente porque éste no ha sido abonado en debida forma, respondiendo el Juzgado 71 en auto adiado el 13 de octubre de 2020, indicó que había olvidado hacerlo, y ordenó nuevamente remitirlo al 72.

7. El 3 de mayo de 2021, se remitió el expediente a reparto para que fuera conocido por el Juzgado 72 C.M., y este generó conflicto negativo de competencias.
8. Le correspondió al Juzgado 17 Civil del Circuito, resolver el conflicto de competencia generado, quien resolvió y dispuso en auto de fecha 30 de marzo de 2022, devolver el expediente al Juzgado 71 C.M.
9. Recibido el proceso por el Juzgado 71, el 2 de junio de 2022, sin que a la fecha haya proferido impulso alguno, transgrediendo de esta manera el derecho fundamental al debido proceso y al acceso de la administración de justicia, por la actuación negligente del Juzgado 71 Civil Municipal de Bogotá, ha resultado imposible obtener una pronta y definitiva resolución.

Una vez notificado el Juzgado, procedió a dar respuesta manifestando el doctor Juan Carlos Medina Guzmán que viene ejerciendo como titular del Juzgado 71 Civil Municipal en Provisionalidad, desde el día 9 de noviembre de 2022.

Informa que una vez instruido del proceso ejecutivo con radicado 2017-0142, emitió auto de fecha 17 de febrero de 2023, en el cual dispuso obedecer lo resuelto por el juzgado 17 Civil del Circuito de esta ciudad, que desató un conflicto de competencia, y se realizó el impulso procesal pertinente.

Señala que, la vulneración alegada por la accionante, en cuanto al impulso procesal, se superó durante el trámite de esta acción constitucional.

Por último, pone de presente los factores que incidieron en el trámite del proceso ejecutivo: *"(i) primero, el mayor volumen de procesos que debemos conocer, porque somos un juzgado de pequeñas causas que recibe una gran cantidad de negocios; (ii) segundo, porque contamos con una persona menos en comparación con los otros juzgados, ya que un Escribiente de este Despacho se asignó "en calidad de préstamo"; y (iii) en tercer lugar, porque las normas del trabajo durante la pandemia han modificado el horario y lugar de trabajo"*.

Igualmente indica que *"la infraestructura de internet que proporcionada el edificio Hernando Morales, no ayuda para resolver prontamente las peticiones; factores todos que han incidido en que no se logre dar celeridad y atención a los usuarios como si estuviéramos en condiciones normales, y el problema estructural en la administración de justicia, dadas las dificultades que ha generado el trabajo virtual en el contexto de la pandemia actual, asunto que le corresponde gestionar sí a cada titular de despacho, pero con las herramientas suministradas por el Consejo Superior de la Judicatura que no en todos los casos son suficientes e idóneas"*

Y finaliza diciendo que *"no existe una vulneración al derecho al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia, pues la dilación no obedece a circunstancias imputables al suscrito como funcionario actual de conocimiento, sino a la "falta de capacidad logística y humana existente para resolver los asuntos que le fueron"*

asignados para su decisión”

CONSIDERACIONES.

Esta acción encuentra su desarrollo y reglamentación en los Decretos 2591 de 1991, y 306, en donde el primero de ellos en su Art. 5° señala su procedencia en los casos que por acción u omisión se haya violado, o se viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el Art. 2° *Ibidem*.

Por lo tanto, con sustento en los presupuestos fácticos esbozados, es necesario entrar a establecer si se vulneraran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del accionante, ante la mora en las decisiones del proceso referenciado y de lo cual solicita el accionante se ordene al juzgado 71 civil municipal dar celeridad al trámite del expediente correspondiente al radicado 11001400307120170014200, que se encuentra al despacho desde el pasado 2 de junio de 2022, y que se ordene al accionado, dictar la sentencia que en derecho corresponda, en el menor tiempo posible.

En sentencia del 30 de julio de 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que una de las garantías del debido proceso es que el procedimiento sea adelantado sin dilaciones injustificadas, aspecto que guarda relación con el derecho de acceso a la administración de justicia. Señaló que la Corte Constitucional, en las sentencias T-1249 de 2004 y T-803 de 2012, ha establecido que le corresponde al juez de tutela examinar en cada caso las condiciones específicas para determinar si existe una justificación que explique la mora, pues no toda dilación puede ser considerada vulneradora de los derechos fundamentales.

El artículo 86 de la Constitución dispone que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos fundamentales. Sin perjuicio de lo anterior, durante el desarrollo del proceso pueden desaparecer las circunstancias que dieron origen a la acción u ocurrir alteraciones fácticas que superen la pretensión de la acción, causando que la decisión pierda eficacia y sustento.

Según reiterada jurisprudencia constitucional¹, la carencia actual de objeto se puede configurar cuando ocurre uno de los siguientes supuestos:

(i) Daño consumado: se presenta cuando en cualquier etapa del proceso, ya sea ante los jueces de instancia o en sede de revisión ante la Corte se materializa u ocurre el daño que se pretendía prevenir mediante el amparo constitucional.

(ii) Hecho sobreviniente: este se genera cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero – distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado que la pretensión de la

¹ Sentencias SU-522 de 2019, T-255 de 2019, T-038 de 2019 y T-149 de 2018, entre otras.

tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la litis.

(iii) Hecho superado: supone que lo que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. En estos casos corresponde al juez de tutela constatar que: (i) efectivamente se ha satisfecho por completo la pretensión; y (ii) que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu proprio, es decir, voluntariamente.

Dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela, como producto del obrar de la entidad accionada. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo profiera una orden.

En sentencia SU-522 de 2019, la Corte se refirió al deber de pronunciamiento del juez de tutela en los casos donde se encuentre probada la carencia actual de objeto, ya no para resolver el objeto de la tutela sino para avanzar en la comprensión de un derecho fundamental o prevenir que una nueva violación se produzca en el futuro, y estableció, que, en los casos de *hecho superado*, no es perentorio que el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo.

Si a pesar de que la acción de tutela pierda su objetivo de proteger un derecho fundamental, ello no significa que cualquier pronunciamiento del juez automáticamente carezca de sentido; por lo que habrá que consultar las especificidades del caso a fin de determinar si es necesario un pronunciamiento de fondo.

El artículo 29 de la Constitución establece como garantía a favor de los asociados el debido proceso sin dilaciones injustificadas; por su parte, el artículo 228 superior hace alusión a la administración de justicia, destacando que los términos procesales se deben observar con diligencia; finalmente el artículo 229 garantiza a todas las personas el acceso a la administración de justicia.

La jurisprudencia constitucional ha determinado que dichas prerrogativas constitucionales se encuentran íntimamente relacionadas y su ámbito de protección involucra el derecho que tiene toda persona a:

- poner en funcionamiento el aparato judicial;
- obtener una respuesta oportuna frente a las pretensiones que se hayan formulado; y
- que no se incurran en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.

Además, estas disposiciones constitucionales están desarrolladas en la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) donde se consagran los principios que rigen la administración de justicia, entre ellos, la

celeridad (art. 4º)², la eficiencia (art. 7º)³ y el respeto de los derechos de quienes intervienen en el proceso.

A su vez, la doctrina ha señalado que *“la construcción conceptual del acceso efectivo a la administración de justicia puede adelantarse a partir de sus principales atributos, lo que permite distinguir entre las definiciones que entienden que este derecho impone una obligación al Estado de proveer un medio, y las que entienden que implica garantizar un resultado concreto. Ello equivale a entenderlo en un sentido restringido (cuando se limita a garantizar el acceso al proceso y a los recursos) o en sentido amplio (si además de lo anterior comprende el derecho a obtener una decisión judicial de fondo y a que esta sea ejecutada)”*⁴.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional desde sus primeros pronunciamientos ha indicado que *“el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia implica necesariamente que el juez resuelva en forma imparcial, efectiva y prudente las diversas situaciones que las personas someten a su conocimiento. Para lograr lo anterior, es requisito indispensable que el juez propugne la vigencia del principio de la seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de resolver en forma diligente y oportuna los conflictos a él sometidos dentro de los plazos que define el legislador”*. De ahí que las personas tienen derecho a contar con un proceso ágil y sin retrasos indebidos, como parte integrante del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Para el caso en concreto, el juez no puede excusarse únicamente a las circunstancias dadas, esto es, volumen de trabajo, insuficiencia de personal, modificación de horario y lugar de trabajo y la falta de buena infraestructura como es el internet, dejando de lado el deber esencial de administrar justicia en forma independiente, autónoma e imparcial. dejando a un lado el interés, la dedicación y la dirección que debe realizar para que sus colaboradores ejerzan a cabalidad su trabajo, máxime que se observa a todas luces que el expediente fue archivado, encontrándose pendiente el impulso oficioso del Juzgado.

En ese orden de ideas, corresponde a los funcionarios judiciales o demás personas que administran justicia, atender los términos procesales fijados por el legislador en normas de carácter público e implementar las medidas tendientes a lograr su cumplimiento.

Así, que se afecta el derecho al debido proceso, por la falta del pronunciamiento del Juzgado, cuando se está ante un caso en el que puede materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

Por lo tanto, la mora judicial constituye una barrera para el goce efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia. Sin embargo, se ha

² *“Celeridad y Oralidad. La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar...”*

³ *“La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley.”*

⁴ Toscano, F. 2013. *Revista de derecho privado* (24).

reconocido que este fenómeno es producto de diferentes causas, como ocurre en aquellos casos donde el funcionario tiene a cargo un número elevado de procesos, los cuales superan las condiciones estructurales del mismo y, por consiguiente, dificulta evacuarlos en tiempo.

Al respecto, la Corte ha resaltado que la mora judicial es injustificada cuando: i) se incumplen los términos procesales para adelantar una actuación judicial; ii) no hay un motivo o razón que explique la demora; y iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial⁵.

En diferentes sentencias la Corte ha desarrollado unos supuestos en los que a pesar de la diligencia del funcionario se genera mora judicial⁶, por ejemplo cuando: i) la complejidad del asunto impide sujetarse estrictamente al término previsto por el legislador; ii) existen problemas estructurales que generan congestión y excesiva carga laboral; o iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden adelantar las actuaciones judiciales con sujeción a los términos.

En el estudio que nos atañe, y como ya quedo indicado, se pudo establecer de las diligencias que ocasionaron la respuesta de la presente acción y que fueron allegadas al plenario, la decisión que emitió el juez el 17 de febrero de 2023 atiende las pretensiones del accionante, en cuanto que posterior a ello se debe continuar con el trámite que compete, no siendo por ahora procedente ordenar al Juez dictar sentencia, en cuanto que debe realizar previamente el trámite respectivo.

En este sentido, en la sentencia T-230 de 2013, recogida en la T-346 de 2018, tratándose de la mora judicial justificada se precisó que de acuerdo con las circunstancias del caso era posible: *“(i) negar la violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, sometiendo al interesado al sistema de turnos; (ii) ordenar excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado; o (iii) en aquellos casos en que se está ante la posible materialización de un daño cuyos perjuicios no puedan ser subsanados (perjuicio irremediable), también se puede ordenar un amparo transitorio en relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia planteada”*.

Ahora bien, frente a la problemática descrita le corresponde a la autoridad judicial, en virtud del valor constitucional de la justicia y el deber que le asiste a las entidades que la administran de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales (art. 2° de la Constitución), informar dicha situación a las autoridades competentes, por ejemplo al Consejo Superior de la

⁵ Sentencia T-346 de 2018.

⁶ Ver sentencias T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001 y T-1226 de 2001, entre otras.

Judicatura, Sala Administrativa, para que adopten las medidas de descongestión correspondientes, como también comunicar a la parte interesada las razones por las cuales existe mora en la solución de su proceso.

Para realizar el estudio de los requisitos de procedencia de la acción de tutela se hará alusión a: i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva; ii) la subsidiariedad; y iii) la inmediatez.

Legitimación en la causa por activa. Según el artículo 86 de la Constitución y el artículo 1° del Decreto estatutario 2591 de 1991 la acción de tutela puede ser propuesta por la misma persona o por quien actúe a su nombre.

Legitimación en la causa por pasiva. La acción de tutela puede ser propuesta contra todas las autoridades públicas y contra los particulares en los casos que indique la ley, ello con base en los artículos 86 de la Constitución y 1° del Decreto estatutario 2591 de 1991.

Subsidiariedad. La subsidiariedad se encuentra estipulada en el inciso 4° del artículo 86 de la Constitución, donde se determina que la acción de tutela es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Si bien en los casos de mora judicial existe la posibilidad de iniciar un proceso disciplinario por la conducta negligente de las autoridades judiciales, ello solo acarrearía una responsabilidad personal del funcionario judicial que entre en mora respecto del cumplimiento de sus obligaciones procesales, donde el investigado puede ejercer su derecho de defensa y explicar las razones que dieron lugar a tal situación y por parte de la autoridad disciplinaria imponer o no la sanción correspondiente.

No obstante, y mientras ese trámite disciplinario se cumple, los administrados continúan padeciendo el retraso en el aparato judicial, comprometiendo valiosos intereses constitucionales que imponen al juez de tutela la garantía de los derechos fundamentales, además de la adopción de medidas tendientes a superar la crisis institucional, resultando procedente la acción de tutela en la medida que se pretende garantizar el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas y el acceso oportuno y eficaz a la administración justicia, para superar por ejemplo defectos estructurales de la organización y funcionamiento de la rama judicial.

Por lo cual, se debe entender que el acceso a la justicia es el derecho de toda persona a tener derechos, es el camino del acceso oportuno, igualitario y efectivo ante la justicia que finalmente cumple la función pacificadora del derecho. Se ha indicado en las varias Jurisprudencias que, la acción de tutela es procedente cuando la demora en la resolución del caso no tiene justificación, el peticionario no cuenta con otro medio de defensa eficaz y, además, el mismo está ante la inminencia de un perjuicio irremediable.

Por otra parte, la SU-394 de 2016 establece que “*para acreditar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el contexto de omisiones judiciales basta con que se pruebe que el interesado ha desplegado una conducta procesal activa y que la parálisis o la dilación no es atribuible a su conducta*”.

En el caso que nos ocupa el señor Rodrigo Peña Bautista, desplegó durante el proceso una conducta activa en el sentido de solicitar el impulso del proceso y demás peticiones.

Inmediatez. La acción de tutela exige su interposición dentro de un plazo razonable y proporcional, el cual se cuenta, desde el momento en que se generó la vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado,

Requisitos anteriores, que no ameritan reparo alguno para el caso en estudio.

Ahora bien, al cesar durante el trámite de tutela la conducta que propició el presente amparo constitucional, en la medida que efectivamente ya el Juez de conocimiento emitió el auto de obedecer y cumplir lo resuelto por el superior, para luego continuar con el trámite que a derecho corresponda, se ha satisfecho la pretensión y la entidad demandada cesó la eventual vulneración al proferir el auto mencionado.

No obstante, en este caso se hace imperioso llamar la atención sobre el asunto sometido a examen a fin de que se adopten medidas para que los hechos vulneradores no se repitan, conforme a los lineamientos sentados en el fundamento jurídico de esta decisión.

En consecuencia, y por haber cesado los derechos fundamentales invocados, atendiendo el auto emitido por el Juez 71 Civil Municipal, el 17 de febrero de 2023, se emitirá la respectiva decisión, no obstante, se remitirá copia de este fallo a Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, autoridades competentes para que tomen las medidas necesarias a los hechos aquí narrados.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR MANDATO LEGAR.

R E S U E L V E.

Primero: **DECLARAR** que ha cesado los derechos fundamentales solicitados por el señor **RODRIGO PEÑA BAUTISTA** contra el **JUZGADO 71 CIVIL MUNICIPAL**, conforme las razones aquí indicadas.

Segundo: Notifíquese el presente fallo.

Tercero: Sin perjuicio del cumplimiento inmediato de lo aquí dispuesto, si esta providencia no fuere impugnada, envíese las diligencias a la H. Corte Constitucional, para su eventual revisión. Ofíciase.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

LA JUEZ.

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS

Firmado Por:

Maria Eugenia Fajardo Casallas

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 027 Escritural

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d172b7a621fab4947aaee19d2281d6a7683fa2cafc725a3cf5265299585c4140**

Documento generado en 22/02/2023 03:43:44 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>